ÍNDICE

CONTENIDO DE LA VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS

NÚMERO	ASUNTO	IDENTIFICACIÓN, DEBATE Y RESOLUCIÓN. PÁGINAS.
30/2013	<p>ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 77 BIS, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, Y 43, FRACCIÓN XXXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK)</p>	3 A 33
42/2013	<p>ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, PÁRRAFO TERCERO, INCISOS A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y 71, FRACCIÓN VIII, INCISO D), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA.</p> <p>(BAJO LA PONENCIA DEL SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK)</p>	34 A 38

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

TRIBUNAL PLENO

**SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL
JUEVES 29 DE JUNIO DE 2017**

ASISTENCIA:

PRESIDENTE: SEÑOR MINISTRO:

LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SEÑORES MINISTROS:

**JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ
MARGARITA BEATRIZ LUNA RAMOS
JOSÉ FERNANDO FRANCO GONZÁLEZ
SALAS
ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA
JORGE MARIO PARDO REBOLLEDO
NORMA LUCÍA PIÑA HERNÁNDEZ
EDUARDO MEDINA MORA I.
JAVIER LAYNEZ POTISEK
ALBERTO PÉREZ DAYÁN**

AUSENTE: SEÑOR MINISTRO:

**ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA
(POR DESEMPEÑAR UNA COMISIÓN DE
CARÁCTER OFICIAL)**

(SE INICIÓ LA SESIÓN A LAS 11:50 HORAS)

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Se abre la sesión. Señor secretario, denos cuenta por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto de acta de la sesión pública número 60 ordinaria, celebrada el martes veintisiete de junio del año en curso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A su consideración el acta, señoras Ministras, señores Ministros. Si no hay observaciones, ¿en votación económica se aprueba? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDA APROBADA.

Continuamos, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013, PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 77 BIS, PÁRRAFOS PRIMERO Y TERCERO, Y 43, FRACCIÓN XXXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA.

Bajo la ponencia del señor Ministro Laynez Potisek y conforme a los puntos resolutiveos a los que se dio lectura en sesión anterior.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. En la sesión anterior se aprobaron por unanimidad de votos los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, relativos a la competencia, oportunidad, legitimación y a la declaración de inexistencia de causas de improcedencia. Ahora, para continuar con el análisis, tiene la palabra el señor Ministro Laynez Potisek – ponente–.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias señor Ministro Presidente. Se trata de una acción de inconstitucionalidad promovida contra algunos artículos de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En los conceptos de invalidez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –que es la promovente– divide – básicamente– su impugnación en dos apartados. El primero es la impugnación contra el artículo 77 Bis de la Constitución Política

del Estado de Sinaloa y, en el segundo, el artículo 43, fracción XXXIV, párrafo segundo, del propio ordenamiento.

Comenzaríamos por el análisis del artículo 77 Bis, párrafo primero. En este artículo, la Constitución Política del Estado de Sinaloa crea al *ombudsman* local y establece su competencia, lo leo: “Para conocer de las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa violatorias de los derechos humanos, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del estado o los municipios, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, se establece un organismo denominado Comisión Estatal de los Derechos Humanos, con carácter autónomo, personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto la defensa, protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos en nuestro orden jurídico vigente”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que este artículo es inválido porque resta eficacia al mecanismo no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en Sinaloa, ¿por qué? Porque de su lectura quedarían excluidos los actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes del Poder Judicial de esa entidad. La CNDH considera, entonces, que hay una violación al artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal.

Recuerdo a este Pleno que en este apartado B del artículo 102, se señala que “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de

naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación”. El tercer párrafo de este artículo trae dos excepciones concretas. “Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

¿Qué es lo que propone el proyecto? Considera que el problema a dilucidar se constriñe a determinar si las entidades federativas pueden establecer excepciones dentro del sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos que puedan llevar a excluir actos u omisiones distintos de los que prevé la Constitución Federal.

A partir de este cuestionamiento, el proyecto contextualiza las diversas reformas que ha sufrido el artículo 102, apartado B, en los cuales se ha ido delineando la jurisdicción de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha habido reformas que tienen que ver con estas excepciones, y del análisis se advierte que únicamente hay tres excepciones; la primera es la del primer párrafo: el Poder Judicial de la Federación y la segunda: los actos de naturaleza electoral y jurisdiccional.

Por lo tanto, la libertad configurativa que pudieran tener los congresos federales debe estar limitada, en este caso, al texto constitucional; por eso, se propone a este Pleno declarar la invalidez del artículo 77 Bis, párrafo primero, en la porción normativa que señala: “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”. Ese sería el primero. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Está a su consideración, entonces, señoras y señores Ministros, el

planteamiento que nos ha hecho el señor Ministro. Por favor, señora Ministra Luna.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Ministro Presidente. He escuchado con mucha atención la presentación que el señor Ministro ponente ha hecho del asunto que se somete a la consideración. En cuanto al artículo 77 Bis, me permito –respetuosamente– disentir del proyecto, por las razones siguientes.

Como bien lo ha señalado el señor Ministro ponente, en este artículo se está –prácticamente– excluyendo de las quejas que pueden presentarse ante los organismos de protección de los derechos humanos al Poder Judicial de la Federación, este artículo —que ahora se está combatiendo— 77 Bis de la Constitución Política del Estado de Sinaloa también excluye de estas quejas al Poder Judicial del Estado de Sinaloa.

Quisiera mencionar que una de las razones por las cuales se dice que esto resulta violatorio del artículo 102, apartado B, de la Constitución, es porque –de alguna manera– está excluyendo exclusivamente al Poder Judicial de la Federación, no así a los poderes judiciales locales, lo cual es totalmente cierto. Lo único que diría es que el artículo 102, apartado B, está estableciendo dos excepciones: la primera es –desde luego– al Poder Judicial de la Federación y, la segunda, es una excepción —podríamos decir— de carácter parcial porque está referida a las cuestiones electorales, dice: “Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”. Entonces, podría entenderse que los tribunales judiciales locales únicamente estarían sometidos en cuanto a cuestiones de carácter administrativo, mas no jurisdiccional.

Sin embargo, leyendo el proceso legislativo de la reforma constitucional del artículo 102, apartado B, de la Constitución, advierto que, en una primera intención, un partido político pretendió que estuviera bajo la férula de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también el Poder Judicial de la Federación, y se pretendió establecer una propuesta donde se determinaba que: de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, sin hacer excepción alguna del Poder Judicial de la Federación.

Sin embargo, de la lectura de toda la discusión que se da en relación a esta propuesta, lo que advierto es que se privilegia –en este debate– la independencia, la autonomía y la imparcialidad del Poder Judicial de la Federación, y es la razón por la que –al final– hay una votación y esta propuesta prácticamente queda desechada y, por eso, el artículo establece la exclusión del Poder Judicial de la Federación, de manera específica.

Sin embargo, debo mencionar que, si analizamos el artículo 116 constitucional, nos dice que “La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación,” y para todo lo demás relacionado con el Poder Judicial de la Federación; advierto que la misma situación se replica en los Estados y, por esta razón, me parece que prevalecen en relación con los poderes judiciales locales los mismos principios que –de alguna manera– fueron suficientes para validar el que se excluyera al Poder Judicial de la Federación.

Ahora, es cierto, el 102 no hace la exclusión específica, pero tampoco lo está incluyendo de esa manera y, de alguna forma está el 116, y si se hiciera una interpretación sistemática — como así la veo— también en defensa de los principios que rigen la función jurisdiccional de autonomía, independencia, inclusive, la imparcialidad, para no aceptar la intromisión de otro poder en relación con los poderes judiciales locales, me parece que no sería inconstitucional. Entiendo que no trato de establecer ningún convencimiento, es mi convencimiento y, simple y sencillamente manifiesto que, por estas razones, votaré —muy respetuosamente— en contra del proyecto, estableciendo que — para mí— sí es constitucional el que se excluya al Poder Judicial local de las quejas que puede llevar a cabo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Está a su consideración, señores Ministros. Señor Ministro Zaldívar.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Gracias señor Ministro Presidente. Estoy de acuerdo con el proyecto; quizás el único matiz que haría es en el párrafo 39 —y algún otro— que habla de una violación al artículo 1º constitucional; respetuosamente, me apartaría de esto.

En mi opinión, hay una norma expresa en el artículo 102, apartado B, constitucional, en que se establece y se regula un medio no jurisdiccional de defensa de los derechos humanos, y se establece claramente la competencia de este tipo de organismos de *ombudsperson* para conocer “de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público”, esta es la regla general.

Y la Constitución establece una sola excepción: “con excepción de los –actos administrativos, debemos entender– del Poder Judicial de la Federación”, porque después hay dos excepciones genéricas que limitan o excluyen la competencia de estos organismos protectores de derechos humanos “tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales”.

Entonces, tenemos una competencia muy clara para conocer asuntos administrativos, para no conocer asuntos electorales y asuntos jurisdiccionales, pero dentro de los actos administrativos está la exclusión específica del Poder Judicial de la Federación.

En mi opinión, esto no da libertad de configuración a las entidades federativas ni podrían ampliar la excepción o limitar la competencia de las comisiones estatales de derechos humanos para conocer de actos administrativos de los poderes judiciales de los Estados, porque esto sería en perjuicio de los derechos humanos de todos los habitantes del país; toda vez que limitar la función del órgano defensor de los derechos, en vía no jurisdiccional, implica limitar también las posibilidades de acceso para los particulares que se sienten vulnerados en sus derechos.

Consecuentemente, me parece que esta es una decisión que tomó el Constituyente de excluir exclusivamente al Poder Judicial de la Federación en cuanto a sus actos administrativos; no creo que esto pueda —reitero— ampliarse a supuestos distintos porque esta norma es de excepción y, como ustedes saben mejor que yo, todas las normas de excepción son de aplicación estricta y de interpretación restrictiva.

Consecuentemente, —en mi opinión— es inconstitucional la norma impugnada, y estaré a favor del proyecto. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias. Señor Ministro Cossío, por favor.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Gracias señor Ministro Presidente. Quisiera retomar el planteamiento que hizo la Ministra Luna, me parece muy interesante y, efectivamente, — como ella lo dice— cuando se estuvo haciendo el diseño constitucional de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hubo un momento importante. En aquellos años, —la primera mitad de los años 90— cuando se discutió este tema, y la razón por la cual se excluyó al Poder Judicial de la Federación —en aquellos años— fue porque se partió de la tesis de que nosotros —desde luego— como Suprema Corte, pero el resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación llevábamos a cabo la función de revisión constitucional de la totalidad del orden jurídico, y esta fue la discusión que hubo en el Senado, que se presentó —inclusive muy interesante aquí— en la Suprema Corte como un actor activo o activísimo en aquel tiempo; insisto, y la razón fue —y muy importante— decir: ¿qué órgano va a revisar los actos del órgano supremo de interpretación constitucional?, y esta fue la razón por la cual se excluyó a todo el Poder Judicial.

Era difícil suponer que se iban a presentar acciones contra los actos de este poder, esa es la razón; y lo que dice la Ministra Luna es interesante, ¿por qué quedó excluido este órgano? Por esta razón, de ser órgano supremo de interpretación constitucional, se decía que era el órgano o el conjunto de

órganos que cierran una especie de cúpula en esta imagen del Poder Judicial.

Sin embargo, creo que esa razón no le aplica al resto de los poderes judiciales, más allá que puedan realizar un control difuso; son órganos primordialmente de legalidad y, por esta razón, es que no se les excluyó expresamente.

Por otro lado, creo que el sistema que tiene esta legislación del Estado de Sinaloa es adecuado. Este artículo 77 Bis, me parece que con la adición que dice: “con excepción de los del Poder Judicial del Estado” hace una copia, pero en aquella expresión que se decía un poco extralógica del artículo 102, apartado B, constitucional, porque no hay la misma razón, no hay la misma naturaleza jurídica –para hablar en el lenguaje tradicional– entre los poderes judiciales del Estado, como órganos de legalidad, y el Poder Judicial de la Federación, como órgano o conjunto de órganos de constitucionalidad.

Por otro lado, la ley me parece que sí hace unas adecuadas distinciones; esta Ley Orgánica de la Comisión Estatal dice que se pueden recibir todo tipo de quejas. En el artículo 27 dice que no podrá conocer de “Resoluciones de carácter jurisdiccional”, y el artículo 9, dice que “sólo podrán admitirse o conocerse quejas o inconformidades contra actos u omisiones de autoridades judiciales”, y esto es importante porque no sólo se refiere al Poder Judicial en sentido formal, el que está previsto en la fracción III del artículo 116, sino que se refiere a todos los órganos jurisdiccionales: juntas, tribunales de lo contencioso administrativo, es decir, todos aquellos que realicen esta función: el tribunal de burócratas, los tribunales electorales, etcétera, que tengan carácter administrativo.

Entonces, me parece que hay un modelo completo, las quejas administrativas contra cualquier servidor público que desempeñe funciones jurisdiccionales en el Estado de Sinaloa pueden ser conocidas, no aquellas que lo entienden.

Ahora, es muy interesante el punto de la señora Ministra Luna, ella le da una lectura diversa a este caso; simplemente quería decir por qué, siendo importante este punto de vista que ella plantea, no lo compartiría. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente. Muy de la mano con lo que ha dicho el señor Ministro Cossío, también creo que en esta determinación es conveniente, en una de sus vertientes, acudir precisamente al origen de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la inclusión de ésta en el esquema general ya creado en la Constitución.

Desde luego, como bien lo expuso la señora Ministra Luna, esto puede tener distintas interpretaciones, todas ellas válidas. Si por alguna razón se excluyó al Poder Judicial de la Federación del ámbito de aplicación de la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bien podría pensarse que las funciones que tiene asignadas este poder, y muy importantemente las características que le dotan de esa certeza, como son su independencia y su autonomía, pudieran también justificar que no se diera posibilidad alguna a que, a través de mecanismos administrativos, como lo pueden ser quejas y

denuncias, pudiera –de cierto modo– generarse algún sistema de presión respecto de sus fallos.

Lo cierto –y me convence, aun cuando la otra expresión también tiene importante contenido— es que en el diseño general de Corte Constitucional para hacer el lugar exacto a que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tuviera el nicho constitucional que le corresponde, hubo de revisar exactamente las atribuciones que la propia Carta Suprema le entrega al Poder Judicial de la Federación.

Esto es, el texto del cual pudiera decirse: la entidad federativa – aquí cuestionada– toma el modelo para excluir al Poder Judicial del Estado, del ámbito protector de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, no es más que la misma redacción que tiene el apartado B del artículo 102, dice: “El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación.” Llevado esto al nivel local, el legislador –entonces– dijo: pues lo mismo será –yo, como legislatura de la entidad federativa– crear un organismo de protección de los derechos humanos que excluya, por razones de autonomía e independencia, al Poder Judicial local.

Lo cierto es que la razón por la que el Poder Judicial de la Federación queda excluida del andamiaje y articulado de la Constitución Federal es porque no tenemos que correr mucho en los artículos y encontrar las funciones fundamentales del Poder

Judicial de la Federación, y éstas se encuentran –entre otros muchos artículos– en el 103; esto es, inmediatamente después del 102.

Mucho se ha cuestionado por qué el 102, que regula otras organizaciones, forma parte del capítulo propio del Poder Judicial; es que –de alguna manera– se vincula. Ojalá tuviera otro lugar, mas lo sigue teniendo aquí.

Decía: no tenemos que correr mucho para entender que hoy el Poder Judicial de la Federación tiene, por encomienda constitucional y en un ánimo de encontrar la congruencia con unas ciertas disposiciones, precisamente, la defensa natural de los derechos humanos; esto es, la protección coactiva más importante en materia de derechos humanos, como lo dispone su artículo 103.

De suerte que, si al Poder Judicial de la Federación le corresponde conocer de toda controversia, dice su fracción I: “Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución”, difícilmente podría suponerse que esta misma atribución quedara encargada a un órgano creado para ello, si hay quien –de este modo– ejerce esta función.

Desde luego, siempre entendiendo, primero, que el artículo ya no es exactamente el que estaba vigente para cuando se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; sin embargo, su esencia es enteramente la misma; segundo, en el entendimiento de que el propio Poder Judicial de la Federación tendrá los mecanismos necesarios, a través de sus órganos administrativos,

para vigilar, a través de un sistema de denuncias, todo aquello que pudiera considerarse infractor por conducta propia de un derecho humano dentro del seno del propio Poder Judicial de la Federación.

Por esa razón, –entiendo, y en el ánimo más protector de las interpretaciones– considero que la disposición que excluye al poder local del ámbito de competencias de la comisión local es violatoria del artículo 102, apartado B, de la Constitución, pues al único que quiso excluir del alcance de las actuaciones competenciales de las comisiones federal y local de derechos humanos es al Poder Judicial de la Federación, por el ámbito y lugar que ocupa en el propio andamiaje constitucional, articulando –con ello– un sistema doble de protección: el que corresponde, por vía de las quejas y denuncias, a la Comisión, excluido el propio Poder Judicial, y el que corresponde jurisdiccionalmente al Poder Judicial, quien –a través de sus propios mecanismos– encontrará un sistema de responsabilidades y seguimiento de denuncias cuando se den este tipo de supuestos.

Por ello, estoy de acuerdo con el proyecto, creo que –en este caso– la interpretación que más debiera favorecer es aquella que da la oportunidad a que la comisión local de derechos humanos tenga competencia para conocer de los actos administrativos que se den en el seno de los poderes judiciales locales, concretamente, de esta entidad federativa. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Señora Ministra Piña, por favor.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: También estoy de acuerdo con el proyecto. Básicamente, comparto las consideraciones de los señores Ministros que me antecedieron; creo que las comisiones de derechos humanos se establecen como organismos con una competencia exclusiva.

El propio artículo 102, apartado B, establece expresamente que “Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.” Esa excluye de su competencia –y de manera expresa– este tipo de asuntos.

Por otra parte, –en específico– establece el conocimiento de queja en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa; o sea, únicamente su conocimiento es de naturaleza administrativa, –ni jurisdiccional ni electoral– porque queda –expresamente– exceptuado por el propio artículo constitucional.

Durante la discusión de este asunto se presentaron varias iniciativas para ver –precisamente– si las comisiones nacionales de derechos humanos podían o no conocer de cuestiones administrativas tratándose de los poderes locales y federales. Y hubo cuatro iniciativas básicamente. La primera decía expresamente que era competencia para conocer de cuestiones administrativas relativas al Poder Judicial de la Federación, así como de los Estados; la segunda se eliminó, y únicamente quedó que no era competente para el Poder Judicial de la Federación; la tercera llevaba cualquier órgano del Poder Judicial Federal; y la cuarta establecía que no podían tampoco conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa procedimental, sin hacer alusión al Poder Judicial Federal o a los poderes judiciales locales.

Ya en el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Derechos Humanos, de la Cámara de Diputados, –como lo señaló el señor Ministro Cossío– expresamente se estableció que, por lo que se refería al Poder Judicial de la Federación, leo: en nuestra tradición constitucional, éste siempre ha sido el garante de la protección jurídica de los derechos fundamentales del gobernado. Es por estas consideraciones que la intervención de los organismos protectores de derechos humanos en los ámbitos mencionados, no nos ha parecido urgente. Esta fue la razón por la que se excluyó al Poder Judicial de la Federación del ámbito del conocimiento de las comisiones de derechos humanos. Se aprobó el proyecto tal como estaba, en relación únicamente a exceptuar al Poder Judicial Federal.

Como conclusiones de todo el proceso legislativo, puedo establecer que sólo una de las iniciativas propuso la participación de los órganos de derechos humanos en la recepción de quejas en contra del Poder Judicial de la Federación y de los Estados; sólo una iniciativa lo proponía.

El dictamen con proyecto de decreto excluyó –de manera expresa– al Poder Judicial de la Federación del ámbito de conocimiento de los órganos de derechos humanos. Algunos diputados y senadores manifestaron su desacuerdo con mantener al margen de las comisiones de derechos humanos al Poder Judicial de la Federación, pero –al final– se aprobó la reforma en los términos en que fue propuesta.

Entonces, aun coincidiendo con la señora Ministra que el conocer las comisiones de derechos humanos de asuntos de naturaleza

exclusivamente administrativa, porque ese es su ámbito, podría llegar a invadir –en cierta medida– alguna cuestión de independencia o no de los poderes judiciales locales; me inclino en función de aceptar la propuesta del proyecto por dos razones: primero, porque esa fue la intención del Constituyente, –expresamente– analizando aun si se debía incluir o no; no sólo a los Estados, sino también al Poder Judicial de la Federación, y se llegó al convencimiento de que únicamente se excluía al Poder Judicial de la Federación, no así de los Estados y, segundo, porque –comparto lo que decía el Ministro Zaldívar– a estos organismos, lo que se pretende proteger –precisamente– son cuestiones relativas a la protección de derechos humanos.

Entonces, el excluir el conocimiento de cuestiones netamente administrativas –que no electorales ni jurisdiccionales– del conocimiento de estas comisiones de derechos humanos a los poderes judiciales de los Estados, lo vería como un detrimento en función de los derechos humanos de los gobernados y, ponderando esta situación, me inclino por esta última interpretación que realiza el proyecto, en el sentido que resulta inválido que en la propia Constitución se establezca que las comisiones de derechos humanos no tendrán competencia para conocer en cuestiones netamente administrativas –que no jurisdiccionales– respecto de los órganos del Poder Judicial estatal, en concreto, del Estado de Sinaloa. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señora Ministra. Señores Ministros, ¿no hay más participaciones en las consideraciones? Vamos a tomar la votación. Señor Ministro Laynez.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Nada más para los ajustes. Muy brevemente, voy a expresar el por qué se sostiene el proyecto; ha sido desarrollado por quienes me precedieron en el uso de la palabra.

Las reformas a que hace referencia la Ministra Piña son fundamentales, partiendo de la idea, —como bien lo dijo la Ministra Luna Ramos— al inicio de la elaboración del proyecto, también dije: bueno, bajo el principio de donde hay una misma razón, debe haber una misma solución jurídica.

Me topé con dos dificultades: la primera, la literalidad del texto constitucional; segundo, esta evolución legislativa donde se ha tocado el tema, ya ha habido iniciativas tendentes a cambiar y, sin embargo, el Constituyente ha hecho que no prosperen y, tercero, —muy brevemente— creo que aportaría muchísimo para enriquecer el proyecto el argumento que nos dio el Ministro Cossío, porque creo que ahí hay un argumento —más allá de la literalidad, más allá de la evolución que ha tenido históricamente el texto— de racionalidad constitucional; es decir, por qué el Poder Judicial de la Federación, como órgano terminal, encargado, además del juicio de amparo, que es un juicio de protección jurisdiccional de garantías y de derechos humanos, las demás atribuciones, como las acciones y controversias que llevaban al Poder Judicial de la Federación a constituirse —precisamente— en el garante constitucional, frente a los demás poderes y —como lo hemos visto— frente a los órganos constitucionales autónomos. Si les parece bien, creo que eso se podría agregar, creo que le daría solidez al proyecto. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias. Vamos, entonces, a tomar la votación con la propuesta, incluida la del señor Ministro Laynez. Tome la votación.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto modificado.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Muy respetuosamente, en contra.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto, anuncio voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto modificado.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Estoy con el proyecto, me quiero reservar un voto concurrente en función de cómo quede el engrose; no estamos viendo una función de equidad, sino de competencia, que es lo que se está analizando. Gracias.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto modificado.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto y sus adiciones.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: Con el proyecto modificado.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta modificada del proyecto; con

anuncio de voto concurrente del señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, y la señora Ministra Piña Hernández reserva su derecho a formular voto concurrente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Nada más anunciaría voto particular en esta parte del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Desde luego, señora Ministra, tome nota la secretaría.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: QUEDA RESUELTO EN ESTA PARTE LA PROPUESTA.

Señor Ministro Laynez, tiene usted la palabra.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Los siguientes artículos impugnados de la Constitución son el propio 77 Bis, en su tercer párrafo, y el artículo 43, que habla de las facultades del Congreso del Estado.

El artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, señala que: “Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, —es decir, los que establece el Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados— formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos,

éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”. Eso nos dice la Constitución Federal.

La Constitución de Sinaloa, en el artículo 77 Bis, retoma –de alguna manera– en su último párrafo la obligación de responder a las recomendaciones, la obligación de fundar, de motivar, de hacer pública; y señala: “además, el Congreso del Estado, a solicitud del Presidente de ese organismo y previo Dictamen de procedencia emitido por las Comisiones Permanentes de Derechos Humanos y la relativa al cargo que desempeñen dichos servidores, aprobado por el Pleno, podrá llamar, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos señala que son inconstitucionales al haber creado este trámite, una vez que el organismo de derechos humanos solicita la comparecencia de la autoridad que se negó a aceptar la recomendación, ésta tenga que pasar a dictamen de comisiones; en suma, esa es la impugnación. Considera que debería desaparecer esta parte del texto y que no puede condicionar a que haya un dictamen.

El proyecto no comparte el argumento del accionante y considera que debe declararse la validez del precepto, ¿por qué? Con la reforma de diez de junio de dos mil once, efectivamente, tuvo como objetivo dotar de mayor fuerza a las comisiones de

derechos humanos y, se establece, además de esta obligación de responder —que ya existía, además— la de fundar, la de motivar la negativa y, además, hacer pública su negativa; es decir, creando un sistema de auditoria social de las negativas que llevarán a cabo las autoridades; y luego viene la facultad de los presidentes de esos organismos de solicitar al Congreso ordenar la comparecencia en caso de negativa y la Constitución dice: podrá llamarlos a comparecer.

Lo que se establece en el proyecto es que la regulación del trabajo parlamentario corresponde tanto a nivel federal —al Congreso de la Unión— como a los congresos de las entidades federativas, y que el texto constitucional no señala que, —en automático— una vez que hay una solicitud del *ombudsman*, tenga que —los congresos— hacer comparecer de manera imperativa a estos funcionarios.

Si vemos, todas las leyes orgánicas de los congresos estatales —como sucede con la federal, o los reglamentos para los debates— establecen que todo asunto que ingresa a un congreso pasa a comisiones, porque requieren siempre un dictamen previo que es el que se somete al Pleno.

Entonces, me parece que no es la interpretación correcta del texto constitucional el señalar que basta la solicitud para que se tenga que hacer comparecer y que el desahogo de trabajo parlamentario de los congresos, pues sí corresponde como una facultad constitucional a las leyes orgánicas que pueden — legítimamente— ordenar que todo vaya a dictamen y dependerá de lo que dictaminen las comisiones y, además, de lo que apruebe el Pleno si se cita o no a comparecer a las autoridades que, además, es el régimen que viene tanto en la Constitución

Federal para autoridades federales como en las de los Estados cuando se cita a comparecer a los demás funcionarios públicos.

Por lo tanto, el proyecto propone declarar la validez y la constitucionalidad en este punto de estos dos artículos, porque el 43 solamente es —digamos— la parte orgánica del congreso. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Está a su consideración la propuesta del señor Ministro. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Gracias señor Ministro Presidente. Suscribo de modo total los argumentos que contiene esta acción de inconstitucionalidad, pues —de alguna manera— como bien lo dice, incide en la organización del trabajo legislativo.

Es cierto que, como en cualquier otro congreso, éste trabaja a través de comisiones, y es que el trabajo tiene que distribuirse y entregarse a quienes han sido seleccionados para integrar esas comisiones por sus conocimientos y experiencia, y esto lleva a que el trabajo se pueda satisfacer de una manera bastante más eficaz y con el conocimiento muy particularizado de quienes las integran; es por ello que, en la definición de la integración de cada comisión, son los órganos legislativos quienes determinan qué integrantes de cada congreso son los más convenientes para cada comisión, y cada comisión —bajo esa pertinencia, por así decirlo— depura y agiliza, prepara el trabajo que habrá de ser sujeto a la Asamblea.

Por esta razón, y por las que también se expresan en el proyecto, respecto a que no tiene por qué estar obligado el congreso sólo

por la mera solicitud de la comisión local, a hacer comparecer a alguien que no ha acatado alguna de sus recomendaciones, queda total y absolutamente a la discreción del órgano legislativo.

En esta medida, no creo que el hecho de que se ponga esto condicionado a que una comisión de carácter previo determine si esto debe o no caminar, pueda violar alguna disposición constitucional; lo que me preocupa, en todo caso, –creo– pudiera adicionarse en el proyecto y, de no ser así, tampoco –supongo– se perdería mucho, es que en el punto número 60 se establece la mecánica a través de la cual estas comisiones habrán de funcionar y determinará el Pleno si es o no de llamarlo, pero esto siempre se está dando en el ámbito positivo.

Creo que esto, por la naturaleza de la violación a los derechos humanos, ya declarada en una queja o denuncia, con un final, por la insistencia de una autoridad de no querer cumplir con la recomendación, no obstante que ha dado razones para ello; creo que la interpretación debida de esto es que, todo dictamen de esta comisión, independientemente de que pudiera parecer orgánico, tiene que ser sometido al Pleno, aun cuando digan que no.

Mi preocupación es que una mayoría –con determinada tendencia o con un ánimo de no querer dejar pasar algo– determinara que esta solicitud no es viable, no la llevaría jamás al Pleno. Creo que, en casos como estos, en donde aquí se está argumentando que será –precisamente– la representación local integrada en Pleno la que determine si es o no conveniente traer a alguien, sepa del trabajo de la comisión, aun cuando éste haya determinado no llamar a una persona, y es que no se está frente a cualquier caso simple, se está frente a una circunstancia que

tiene un antecedente, que lo es una denuncia o una investigación de oficio, que concluyó con una recomendación, que se formuló y que hasta el momento no se ha cumplido, y que –por supuesto– tiene razones por las cuales la propia autoridad ha considerado no cumplir.

No es simplemente una denuncia, es todo un procedimiento concluido; éste en función del trabajo legislativo comienza con una comisión, la que habrá de determinar si esto se lleva o no a un Pleno; pero cualquiera que sea el resultado, estimo –por la gravedad de la importancia, que este tipo de comisiones tienen– que cuanta decisión tome esta comisión, que –de entrada no me parece así– vulnera algún supuesto de la Constitución, tiene que ser sometida al Pleno, y esto queda precisamente en el encargo de esta Suprema Corte, a quien ya se le cuestionó el contenido de esta disposición, y con la fórmula de la interpretación puede hacer que cumpla el objetivo –precisamente– que quiere; esto es, un mecanismo que permita que si la comisión ha decidido que no prospere una solicitud de comparecencia, –cualquiera que sea, una u otra– tiene que ser siempre sometida al Pleno, quien tendrá la última palabra para determinar si es o no procedente.

No con ello quiero demeritar el trabajo de las comisiones, pero lo que sí quiero garantizar es que, en tratándose de una cuestión tan delicada, que no sólo es una mera denuncia o percepción o parecer de alguien que cree que se ha violado un derecho humano, sino que éste fue motivo de una denuncia o queja, que ésta prosperó, que se hizo una recomendación y que no se ha cumplido, la gravedad de la situación sí implicaría –por lo menos, para mi entender– que las decisiones de la comisión –cualquiera que estas sean– sean siempre sujetas al escrutinio del Pleno de ese congreso, y determine si confirma, cuando la comisión ha

determinado no llamar a un servidor público o, en todo caso, si coincide con lo que dice la comisión en cuanto a que sea llamado, pero siempre del conocimiento del congreso en lo general, cualquiera que sea el sentido.

Sólo así puedo entender que esto alcanzaría un grado de completitud absoluto, pues no sólo quedaría en el trabajo de una comisión, que bien pudiera suceder en ciertas circunstancias, —espero no existan— el ánimo por una mayoría determinada, que ninguna pase, si ninguna pasa y, bajo la propia estructura del funcionamiento congresional, ahí queda, pues simple y sencillamente —jamás— la asamblea, por más que pueda tener conocimiento a través de otros medios, podrá hacer prosperar una comparecencia, si es que su comisión sesgada o con razones no quiere que algo así suceda.

Por eso creo que la interpretación que puede dar esta Corte es, de acuerdo con ello, esto resulta acorde al texto constitucional. Nada implica que se haya organizado así el trabajo del congreso; sin embargo, por tratarse de la materia de que se trata y de todos los antecedentes que le revisten, la opinión que tenga sobre cada caso de comparecencia, la propia comisión tiene que ser llevada al propio seno —como aquí lo explica— del congreso, a efecto de que éste confirme el no llamar, acuerde el llamar cuando así sea determinado o, en su caso, revoque la decisión que haya tomado la comisión.

Me parece que estos temas merecen el máximo de atenciones y, en ese sentido, cuanta garantía pueda ofrecerse para que todo se haga del conocimiento público y de la mayor magnitud en función de las atribuciones del congreso, siempre será bienvenido. Gracias señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Está a su consideración, señoras Ministras, señores Ministros. Si no hay más observaciones. ¿Quisiera intervenir, señor Ministro Laynez?

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: No, señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces, vamos a tomar la votación, señor secretario, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Estoy de acuerdo con el proyecto.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: En esta parte, estoy de acuerdo.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor del proyecto.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto, agregando mi interpretación.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES: Con el proyecto.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos, con precisiones del señor Ministro Pérez Dayán respecto de esta parte del proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien. **CON ESTO QUEDA TAMBIÉN RESUELTA ESTA PARTE DE LA PROPUESTA.**

Señor Ministro Laynez, no sé si quisiera usted hacer la propuesta de los efectos.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Los efectos que se proponen, en este caso, es que la invalidez decretada en el artículo 77 Bis, párrafo primero, de la Constitución —hay que recordar— sólo es en la porción normativa que señala: “con excepción de los del Poder Judicial del Estado”, surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Está a su consideración la propuesta de efectos de esta resolución. Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Señor Ministro Presidente, sé que en la materia penal los efectos pueden ser retroactivos, pero quisiera saber ¿qué pasa con los procedimientos que ya se hubieren abierto en función de una disposición abiertamente inconstitucional? No sé si esto pudiera traer una mención dentro del texto de la sentencia; lo primero que me llega a la mente es: esta disposición surtió sus efectos, y podría ser que haya denuncias abiertas en ese sentido, algunas hasta con concluidas; y, por tanto, —probablemente hasta personas sancionadas— no sé si el alcance de un tema de derechos humanos —como esto—

podría tener algún tratamiento diferenciado o, simplemente quedarnos, como lo que se dijo: surtirá sus efectos a partir de que se notifique. ¿Y qué sucederá con todo lo que pasó en función de esta disposición, los procedimientos abiertos, las sanciones –quizá– tomadas? No lo sé. Creo que es una cuestión de reflexión, y –para mí– esto tendría que terminar diciendo que se dejarían sin efectos cualquiera de las situaciones tomadas en función de esta norma.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Algún comentario, señor Ministro Laynez?

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Siendo muy interesante lo que plantea el Ministro Alberto Pérez Dayán, consideraría que no es necesario; es un sistema no jurisdiccional de protección de derechos humanos. La sanción es la auditoría social o, que derivado de una recomendación, ésta no se acepte, pero no es un sistema sancionatorio *per se* que perjudicara la esfera jurídica, mucho menos de una institución.

Por lo tanto, no creo que hubiese alguna vulneración, primero, los concluidos ya tendrán las recomendaciones; lo que diría es que aquellas quejas que se hubiesen presentado en materia administrativa, pues no van a poder culminar con una recomendación, puesto que no hay –digamos– competencia para esto.

Entonces, respetuosamente, creo que los efectos pueden surtir, como dice el artículo 105, en adelante.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señor Ministro Pérez Dayán.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Quedo conforme con esa explicación, lo que me importaba era expresarlo.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Señora Ministra Luna.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Gracias señor Ministro Presidente. En la parte correspondiente a los efectos por el artículo 77 Bis, en el que voté en contra, lo haré vencida por la mayoría; estoy de acuerdo con los efectos que se proponen.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Tomemos la votación nominal.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: Con el proyecto.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Por las razones expresadas, estoy de acuerdo en esta parte del proyecto.

SEÑOR MINISTRO FRANCO GONZÁLEZ SALAS: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor de la consulta.

SEÑORA MINISTRA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO MEDINA MORA I.: A favor del proyecto.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: Con el proyecto.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE AGUILAR MORALES:

También, a favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señor Ministro Presidente, me permito informarle que existe unanimidad de votos a favor del considerando relativo a efectos, con precisiones de la señora Ministra Luna Ramos.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Bien. Lea los resolutivos, señor secretario, por favor.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

PRIMERO. ES PROCEDENTE Y PARCIALMENTE FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 43, FRACCIÓN XXXIV, PÁRRAFO SEGUNDO, Y 77 BIS, PÁRRAFOS PRIMERO –CON LA SALVEDAD INDICADA EN EL RESOLUTIVO TERCERO DE ESTE FALLO– Y TERCERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA, CONTENIDOS EN EL DECRETO NÚMERO 903, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EL TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

TERCERO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 77 BIS, PÁRRAFO PRIMERO, EN LA PORCIÓN NORMATIVA “CON EXCEPCIÓN DE LOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO”, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SINALOA.

CUARTO. LA DECLARACIÓN DE INVALIDEZ DECRETADA EN ESTE FALLO SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE SINALOA.

QUINTO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN EL PERIÓDICO OFICIAL

DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: A su consideración los resolutivos, señores Ministros. ¿En votación económica se aprueban? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDAN APROBADOS.

CON ESTO, QUEDA RESUELTA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 30/2013.

Continuamos, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente. Se somete a su consideración el proyecto relativo a la

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2013, PROMOVIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEMANDANDO LA INVALIDEZ DEL ARTÍCULO 58, PÁRRAFO TERCERO, INCISOS A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS Y 71, FRACCIÓN VIII, INCISO D), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, AMBAS DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 972.

Bajo la ponencia del señor Ministro Laynez Potisek y conforme a los puntos resolutivos que proponen:

PRIMERO. ES PROCEDENTE PERO INFUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 58, PÁRRAFO TERCERO, INCISOS A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Y 71, FRACCIÓN VIII, INCISO D), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 972 PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

NOTIFÍQUESE; “...”

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor secretario. Someto a su consideración los primeros considerandos, relativos, el primero a la competencia, el segundo a la oportunidad, el tercero a la legitimación y el cuarto a que no existen causas de improcedencia que se hayan hecho valer ni se adviertan de oficio. ¿Están de acuerdo con estos cuatro considerandos? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

APROBADOS.

Le pediría al señor Ministro nos hiciera el planteamiento.

SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias señor Ministro Presidente. Voy a ser muy breve, porque esta acción está muy relacionada con la anterior, también tiene que ver con la legislación en el Estado de Sinaloa.

Se trata de la impugnación únicamente de dos artículos de dos leyes: la Ley Orgánica de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa. En este caso, lo que hicieron es reglamentar las reformas constitucionales que acabamos de analizar, con excepción del artículo 51, es decir, de la competencia.

Entonces, el artículo 58 lo que hace es describir el procedimiento, alega cuando hay negativa de la recomendación, el procedimiento legislativo de a qué comisiones va y la aprobación por el Pleno para efecto de llamar a comparecer; la Ley Orgánica del Congreso, únicamente se modifica para establecer la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que sea competente en estos asuntos.

El proyecto, por lo tanto, lógicamente, la impugnación de la CNDH estaba relacionada con sus argumentaciones –que ya analizamos– y, por lo tanto, el proyecto, pretendiendo ser congruente, lo que propone es la validez y la constitucionalidad de ambas reformas. Gracias.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Gracias señor Ministro. Como ustedes saben, tenemos pendiente un acuerdo con relación a la mecánica que debemos adoptar para los turnos de sustitución de los Ministros que se han declarado impedidos en alguna de las otras Salas; de conformidad con el artículo 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Les voy a pedir, entonces, que dejemos la discusión de este asunto para la próxima sesión.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Es igual.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Exacto. Si quieren que lo sometamos a votación.

SEÑORA MINISTRA LUNA RAMOS: Votación económica.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿No hay mayor discusión?, por si alguien quisiera intervenir.

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: No señor Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Entonces, con la presentación que ya hizo el señor Ministro podríamos adelantar la votación del asunto, si ustedes están de acuerdo. Entonces, les pregunto ¿en votación económica se aprueba? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDA APROBADO.

¿No hay alguna otra observación señores Ministros, respecto del planteamiento del asunto?

SEÑOR MINISTRO COSSÍO DÍAZ: No señor Ministro Presidente.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: Lea los resolutivos, señor secretario.

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí señor Ministro Presidente.

PRIMERO. ES PROCEDENTE PERO INFUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEGUNDO. SE RECONOCE LA VALIDEZ DE LOS ARTÍCULOS 58, PÁRRAFO TERCERO, INCISOS A) Y B), DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS, Y 71, FRACCIÓN VIII, INCISO D), DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO 972, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE DICHA ENTIDAD EL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.

TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA SENTENCIA EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SU GACETA.

SEÑOR MINISTRO PRESIDENTE: ¿Están de acuerdo con los resolutivos señoras Ministras, señores Ministros? ¿En votación económica se aprueban? **(VOTACIÓN FAVORABLE).**

QUEDAN APROBADOS.

Y, CON ELLO, RESUELTA LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 42/2013.

Voy a levantar la sesión. Los convoco a la sesión que tendrá lugar el próximo lunes, en este recinto, a la hora acostumbrada y, a continuación, analizaremos el acuerdo que mencioné hace un momento. Se levanta la sesión.

(SE LEVANTÓ LA SESION A LAS 12:50 HORAS)